

Fomento Fabril, el mismo 16 de agosto, escribió una airada carta al presidente del Eximbank, en la cual le explicaba que «Chile vive un proceso de profundas transformaciones económico-sociales que afectan radicalmente su estructura económica y, en consecuencia, la situación de sus empresarios. Frente a él, nuestra institución gremial— la más antigua de las Américas— se encuentra empeñada en MINIMIZAR EL COSTO ECONÓMICO DE LAS TRANSFORMACIONES QUE SE VIVEN y en garantizar plenamente que él se desenvuelva en un marco de libertad y democracia y con pleno respeto a las garantías fundamentales». Por eso, frente a la negativa de préstamos por parte del Eximbank, «como empresarios privados y sobre todo por respeto a nuestra noble tradición democrática, no podemos aceptar que se subordinen resoluciones de esta índole, condicionándolas a decisiones que pueda adoptar nuestro Gobierno dentro del régimen jurídico que democráticamente se ha dado al país». Seguidamente, la Sociedad de Fomento Fabril le pide al Eximbank que revoque la postergación del préstamo a LAN-Chile.

Fuerza y debilidad

Cuando el Pentágono decidió en octubre de 1970 dar luz verde a la «experiencia de Allende» para «esperar y ver» si se le podía manejar como «bombero del incendio popular», los generales «reformistas» estuvieron de acuerdo y, en consultas con los sectores industriales y comerciales chilenos, estimaron que, si no se asfixiaba desde el exterior el experimento, «este puede resultar» y «la reforma de las estructuras hacia un capitalismo de Estado más sólido» puede «calmar la insurrección popular».

El Gobierno de Allende había iniciado una política de «reactivación económica» para 1971, que se basaba fundamentalmente en la utilización de toda la capacidad productiva y en el aumento de la demanda interna por medio de sustanciales reajustes de sueldos y salarios bajos, con un control de precios que, en una estructura monopólica como la chilena, afectaba en realidad menos a la oligarquía que a las empresas medianas y pequeñas. Esta reactivación económica hizo que en 1971, los índices de crecimiento económico del país llegaran a 8,3 %, lo cual constituía un récord. Pero, ese era el tope de la reactivación. Si en ese momento no había acumulación de capital, el sistema se

desmoronaría y, al desmoronarse, la enorme presión popular podría desbordarse más allá de los límites «razonables» establecidos por los dueños de Chile.

Por otra parte, la presión de los generales «reformistas» sobre Allende había logrado que la viga maestra del programa de la Unidad Popular (el traspaso de todos los monopolios en manos privadas chilenas o extranjeras) se redujera a una expresión mínima. En efecto, para realmente expropiar los monopolios, se necesitaba traspasar al Estado, de un total de poco más de 35.000 establecimientos industriales y de distribución en todo el país, una cantidad un poco superior a 266 empresas de carácter monopólico. Allende prometió traspasar sólo 90 de ellas, dejando así en manos de la oligarquía y de los norteamericanos más del 50 % del capital monopólico. Más todavía: de esas 90 empresas monopólicas, sólo 53 iban a pasar a ser de dominio total del Estado, mientras las 37 restantes quedarían en la llamada «área mixta», en sociedad con esos mismos capitales monopólicos en manos privadas yanquis y chilenas.

Además, Allende había accedido a expropiar dentro de la «Constitución y las leyes» con lo cual el costo de la formación del área de propiedad social era gigantesco, traspasando a manos de los «expropiados» enormes cantidades de capital que les permitía seguir manteniendo un sustancial poder económico y de maniobra. Ya para agosto de 1971, las cifras eran elocuentes: un total comprometido de 10.946 millones de escudos (890 millones de dólares) para ese año. El detalle era el siguiente:

Compra de acciones de bancos comerciales . . .	400 millones
Pago al contado por la expropiación de latifundios.	320 millones
Compra de empresas industriales monopólicas . .	600 millones
Compra de tres bancos extranjeros	120 millones
Hierro, salitre y consorcios industriales yanquis .	576 millones
Indemniz. «indirecta» a Anaconda y Kennecott .	8.830 millones

Por supuesto, todo esto provocaba una debilidad potencial en el plan económico del Gobierno que, en agosto de 1971, tenía confiados a los oligarcas chilenos en poder manejar «la situación» y mantener a Allende dentro del «cambio reformista» para «evitar la revolución». Pero, para conseguir que este esquema caminara, era importante que Estados Unidos no apareciera como lo que realmente era: el enemigo principal del pueblo chileno. Era importante que no se asfixiara la economía

nacional, dependiente en lo principal del capital norteamericano, para permitir un «relativo nivel económico» que no alentara a los obreros, campesinos y empleados a «seguir adelante en el proceso de transformaciones». Pero el Pentágono no había sido capaz de convencer a los asesores económicos de Nixon de mantener una «actitud prudente y flexible con respecto a Allende», y eran la Anaconda y la Kennecott las que estaban manejando a Nixon.

En este momento del desarrollo de la lucha de clases en Chile, es cuando comienzan a surgir dudas en el seno de los altos mandos militares. Aun cuando hacía apenas dos meses que la enorme presión popular había obligado a la mayoría reaccionaria en el Parlamento a plegarse a la minoría de izquierdas y aprobar por unanimidad la nacionalización de las compañías norteamericanas que explotaban el cobre, el sentimiento de «antiimperialismo en la base» no había desaparecido; al revés, aumentaba con los días.

Un grupo de generales, principalmente en el Ejército, dirigidos por Óscar Bonilla (ex edecán del presidente Eduardo Frei y muy ligado políticamente al grupo de Frei en la Democracia Cristiana); Manuel Torres de la Cruz, ultracatólico y una especie de «padre» del actual fascismo chileno, jefe de la Quinta División en el extremo sur; Carlos Forrestier, jefe de la División Blindada del norte; Hernan Hiriart, jefe de la División de Caballería con asiento en Valdivia, al sur; Ervaldo Rodríguez Lasa, jefe de la Tercera División, con asiento en Concepción; Alfredo Canales Márquez y Ernesto Baeza Michelsen, comenazaron a expresar opiniones contrarias a la tesis de «esperar y ver» de los generales «reformistas».

A este grupo de generales se les llamó los «duros». Ellos decían que los «reformistas» estaban equivocados en su apreciación de poder manejar a Salvador Allende, porque éste iría donde «el populacho lo arrastrara». Agregaban que la tarea principal del Ejército y demás Fuerzas Armadas, era convencer al Pentágono de la necesidad de derrocar a Salvador Allende y «reinstaurar un Gobierno democrático como el de Eduardo Frei».

Manuel Torres de la Cruz, por ejemplo, explicaba que «Allende será incapaz de frenar los deseos de destrucción de los elementos marxistas» y hará todo lo posible por engañarnos y ganar tiempo para estar en situación de «virar el país como un calcetín». (Resulta grotesco este argumento de Manuel Torres

de la Cruz, si consideramos que aparecía como «general allendista», amigo personal» del Presidente de la República. y al mismo tiempo era el que más opinión formaba entre sus mandos para derrocar a Allende.)

Los «duros» decían que debía montarse un «esquema de acción» parecido al de septiembre-octubre de 1970, ya abortado por las razones que vimos en este mismo capítulo. El esquema era el de nombrar una Junta Militar transitoria, presidida por Torres de la Cruz, para que «en un plazo de seis meses» llamase a nuevas elecciones presidenciales, con «Eduardo Frei como candidato».

Durante la segunda mitad de 1971 y los primeros ocho meses de 1972, la influencia de la tesis de los «duros» no tuvo gran peso en el seno del Ejército, aun cuando contaba con las simpatías del entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danyau, y de los generales Gustavo Leigh, César Berdichewsky y Carlos Van Schowen, así como del jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, vicealmirante José Toribio Merino, y sus colegas Pablo Weber y Horacio Justiniano (los tres en estrecho contacto con la US Navy). Justiniano, entretanto, cumplía a cabalidad con su papel de «allendista», apareciendo ante Salvador Allende como «hombre progresista», «admirador de la Unión Soviética» y con una «lealtad a toda prueba».

Este grupo de los generales «duros» contaba con una característica que los generales «reformistas» no tenían: su estrecho contacto con figuras políticas como Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana, y Patricio Phillips, Pedro Ibáñez y Francisco Bunes, del Partido Nacional.

Los constitucionalistas

El equilibrio y la marginación de la lucha política visible de las Fuerzas Armadas lo mantenían un grupo de generales encabezados por el propio comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats González. Sus figuras más conocidas estaban en el jefe de la Primera División, Joaquín Lagos Osorio; el jefe del Estado Mayor, general Augusto Pinochet Ugarte; el general Héctor Bravo Muñoz (que después sería enviado a la División de Caballería en reemplazo de Hernan Hiriart, cuando éste intentó una insurrección militar en marzo de 1972 y fue dado